

FRANKLY FABIAN FUQUENE RIVERA

Abogado

SEÑORES:

JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL
Buga - Valle del Cauca

19 7 NOV 2016



REF. ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

RAD. 2016- 00255

DEMANDANTE. JAIRO GUTIERREZ HURTADO

DEMANDADO. DIRECCION EJECUTIVA RAMA JUDICIAL - FISCALIA GENERAL
DE LA NACIÓN

FRANKLY FABIAN FUQUENE RIVERA, mayor de edad, vecino de esta localidad, identificado como aparece al pie de mi firma, en calidad de apoderado de la parte demandante, por medio de la presente me permito manifestar al Despacho que DESISTO de las pretensiones de la demanda en lo que respecta en vincular al Ministerio de Defensa Nacional dentro de la presente acción de reparación directa, toda vez que efectivamente los llamados a reparar a mi representado el señor JAIRO GUTIERREZ HURTADO son la Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación.

Por lo tanto la demanda quedara de la manera en que se anexa.

Cordialmente,

Frankly Fabian Fuquene

FRANKLY FABIAN FUQUENE RIVERA

C.C. No. 14.797.749 de Tuluá (V)

T.P. 226169 del C. S. de la Judicatura

Señor:
JUEZ ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
GUADALAJARA DE BUGA VALLE
E.S.D

REF.: ACCION DE REPARACION DIRECTA

Demandant : JAIRO GUTIERREZ HURTADO.

Demandados: Fiscalía General de la Nación, Rama judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (Art 159 ley 1437 de 2011)

FRANKLY FABIAN FUQUENE RIVERA, mayor de edad, vecino de esta localidad, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando de conformidad con el poder especial, amplio y suficiente que me ha conferido: JAIRO GUTIERREZ HURTADO en calidad de víctima por la Administración de Justicia, identificado con la cedula de ciudadanía C.C. No. 14.953.674. expedida en Cali (V) por medio del presente escrito, con todo respeto ante este Honorable Despacho, me permito manifestar que en ejercicio **DE LA REPARACIÓN DIRECTA** consagrado en el Art. 140 del Código Contencioso Administrativo (**LEY 1437 DE 2011**), Demando a la **NACION- FISCALIA GENERAL DE LA NACION, RAMA JUDICIAL- DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL**, o sus Delegados ante lo Contencioso Administrativo para que, con citación y audiencia del señor Agente del Ministerio Público, se ordene la **REPARACION DIRECTA**, a cargo de la **NACION- FISCALIA GENERAL DE LA NACION, RAMA JUDICIAL- DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTARCIÓN JUDICIAL**, o sus Delegados ante lo Contencioso Administrativo, equivalente a la indemnización integral de los perjuicios causados por hechos u omisiones que deben derivar responsabilidad del Estado, para que en sentencia de merito se pronuncien sobre los siguientes:

HECHOS

PRIMERO: El día 15 de noviembre del año 2014, el señor JAIRO GUTIERREZ HURTADO fue capturado por parte de la policía Nacional en la ciudad de Tuluá (V) cuando portaba 4.2 gramos de cocaína

SEGUNDO : el mencionado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y luego presentado ante el Juez 2 Penal Municipal con función de control de garantías de Tuluá (V) el día 16 de noviembre del año 2014, quien impartió legalidad al acto de captura, a la sustancia incautada, se formuló importación a JAIRO GUTIERREZ HURTADO en calidad de probable autor del delito de Fabricación Trafico o porte de estupefacientes previsto en el artículo 376 inciso 2 del Código Penal, y se impuso como medida de aseguramiento la detención preventiva en lugar de residencia.

TERCERO: el día 05 de enero del año 2015 el fiscal 30 seccional de la ciudad de Tuluá (V) presentó ante el centro de servicios judiciales de dicha ciudad

solicitud de preclusión, la cual correspondió al Juez 2 Penal del Circuito de Tuluá (V) funcionario que a través de audiencia pública de fecha 19 de octubre del año 2015 por medio de auto interlocutorio No. 117 se decretó la preclusión en favor de JAIRO GUTIERREZ HURTADO, ordenándose la libertad INMEDIATA de mi patrocinado.

CUARTO: Cumpliendo la ritualidad procesal pertinente, se realizó AUDIENCIA DE CONCILIACION ante la Procuraduría 57 Judicial I Delegada ante lo contencioso administrativo, celebrada el 11 de abril de 2016 en Santiago de Cali (V), la misma fue declarada fracasada por inasistencia de algunos de los convocados como quiera que sólo asistió el representante de la rama judicial- Dirección Nacional de Administración judicial.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

La **Constitución Nacional prevé en el art. 90** que el Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o por la omisión de las autoridades públicas. En este caso - la responsabilidad patrimonial del Estado, por "Error Judicial" permite ahora a mi poderdante, acudir ante la justicia contenciosa administrativa para que a través de la Acción de Reparación Directa, reclame del Estado, el pago de las sumas de dinero que se le deberán liquidar a su favor, como indemnización de perjuicios por el proceso penal que debió soportar injustamente, a causa de la falla de la administración de justicia en cabeza de varios de sus funcionarios.

Como lo consagra el **Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437)** en su **Art. 140** que a la letra dice:

"...En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado.

*De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma. **Expresión subrayada declarada Exequible por el cargo examinado, mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-644 de 2011***

Las entidades públicas deberán promover la misma pretensión cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública..."

En consecuencia, para mi poderdante se constituye la existencia de una obligación a su favor, de origen extracontractualmente exigible de pagar una cantidad líquida de dinero como se desprende y prueba con los documentos anexos.

El **art. 9 No 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos**, apunta a que debe haber reparación en caso de encarcelación ilegal como lo es el caso. Igualmente el No 6. Del art. 14 del mismo pacto internacional, indica:

"... Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido..."

Uno de los fundamentos para aceptar la responsabilidad del estado por una deficiente administración de justicia es la *Falla del Servicio Público*, al igual que para las demás actuaciones del estado por las que debe responder; si se tiene en cuenta que sus obligaciones se basan fundamentalmente en la protección de la vida, honra y bienes de los asociados, para asegurar de esta forma el cumplimiento de los deberes sociales tanto del estado mismo como de los particulares, es apenas obvio que de mediar un incumplimiento para llevar estos fines a la realidad se derive como consecuencia la responsabilidad del ente, entendiendo que estos fines constituyen una obligación latente y no un mero enunciado filosófico. La jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia se ha ocupado del tema ampliamente, y con fundamentos legales claros tanto de la anterior Constitución como de esta ha llegado a la conclusión anotada.¹

La Responsabilidad Patrimonial del Estado por falla en la administración de justicia, según lo previo el **art. 65 de la Ley 270 de 1996** estatutaria de la administración de justicia que reguló la responsabilidad del Estado y de sus funcionarios y empleados judiciales. Modificada por la ley estatutaria 1285 de 2009, en la que se establece, sobre la Responsabilidad Patrimonial del Estado que:

¹Ver Sentencias del Consejo de Estado: SECCION TERCERA SUBSECCION A Consejero ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA Bogotá, D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil doce (2012) Radicación número: 73001-23-31-000-2000-01402-01(22701) Actor: SECUNDINO MORA PATIÑO Y OTROS Demandado: NACION-RAMA JUDICIAL-DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL Y FISCALIA GENERAL DE LA NACION.Sentencia de 14 de marzo de 2002, exp. 12076 y Sentencia de 20 de febrero de 2.008, exp. 15980. Sentencia de 6 de septiembre de 2001, expedientes números 13232 y 15646, Consejero Ponente doctor Alier Eduardo Hernández Enríquez. Expediente 85001 23 31 000 1999 0351 (23381) de 2011, 2012-02-08. NUEVAMENTE LA FISCALÍA RESPONDE POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, EN ESTE CASO DE UN CIUDADANO VINCULADO "IRREGULARMENTE" A INVESTIGACIÓN PENAL. Analizados los elementos de prueba aportados, la Sala encontró acreditado que la actuación de la Fiscalía constituyó el factor determinante para que la privación de la libertad del ciudadano resultara injusta, pues pese a las inconsistencias con la identidad del presunto autor del delito de estafa, la Fiscalía profirió orden de captura. Modifica. M. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Documento Disponible al Público en Marzo de 2012. Temas: Principio Universal de Presunción de Inocencia. Prisión Arbitraria. Daño Antijurídico.

"el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales. En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia..."

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Por los daños antijurídicos causados por acción u omisión de las autoridades públicas/ **RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO**-Elementos estructurales/**RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO**-Jurisprudencia del Consejo de Estado

El constituyente de 1.991 estableció en el artículo 90 de la Constitución Política que el Estado respondería patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

Como consecuencia de ello, la responsabilidad en general descansa en dos elementos: el daño antijurídico y la imputación.

Frente al primero, incorporando a nuestra legislación la jurisprudencia y la doctrina española, se dijo que daño antijurídico era aquel que la víctima no estaba obligada a soportarlo, presentándose un desplazamiento de la culpa que era el elemento tradicional de la responsabilidad para radicarlo en el daño mismo, es decir, que éste resultaba jurídico si constituía una carga pública o antijurídico si era consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del derecho legalmente protegido, de donde surgía la conclusión que no tenía el deber legal de soportarlo.

Finalmente, en cuanto a la imputación no era más que el señalamiento de la autoridad que por acción u omisión había causado el daño.

A pesar de la claridad de la existencia de estos dos únicos elementos estructuradores de la responsabilidad patrimonial del Estado, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha persistido en la tendencia de aplicar a los casos en estudio una de las dos teorías que tradicionalmente se venían aplicando hasta antes de la Constitución de 1991: la teoría de la responsabilidad subjetiva que ha descansado en la culpa (elemento no aplicado en España por radicarlo en el daño mismo) y la teoría de la responsabilidad objetiva, que descansa en el riesgo creado.

Todo ello para efectos probatorios, de las cuales se han construido distintos títulos de imputación que el Juez, en ejercicio del principio *Iura Novit Curia*, aplica en cada caso en concreto.

MEDIDA DE ASEGURAMIENTO-La competencia radica en la Fiscalía General de la Nación

Esta Delegada no puede desconocer que tanto la Constitución Política como la Ley, le permiten a la Fiscalía General de la Nación proferir contra una persona medida de aseguramiento, como es, la detención preventiva, por unas causas legales, así como tampoco, puede perder de vista que se trata de una medida

restrictiva de un derecho fundamental, cual es el de la libertad y que, por ello, no es posible ordenarla ni extenderla en el tiempo sin una justa causa, formulación en relación con la cual la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha mostrado en extremo enfática.

DERECHOS FUNDAMENTALES-Libertad personal y presunción de inocencia

Así mismo, es de tener en cuenta que los derechos fundamentales a la libertad personal² y la presunción de inocencia, se encuentran consagrados tanto en nuestra Constitución Política como en las normas internacionales, ratificadas mediante leyes aprobatorias, entre ellas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD-Jurisprudencia sobre cuándo se torna en injusta

Concordante con lo expuesto, la jurisprudencia nacional e Internacional han señalado que la privación de la libertad se torna en injusta cuando ésta no cumple con los principios de proporcionalidad y razonabilidad que impone el legislador, al considerar que el derecho a la libertad aun cuando no es absoluto, si es un derecho fundamental que debe ser respetado y garantizado.

PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD-Responsabilidad Patrimonial del Estado

Es menester recordar que en la Constitución Política, artículo 90, se ha consagrado a cargo del Estado la responsabilidad de manera objetiva por los daños antijurídicos que ocasione con el actuar o las omisiones de las autoridades públicas, entre ellas, las autoridades judiciales, la Ley estatutaria de la Administración de Justicia, (ley 270 de 1996), contempla la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad.

De esta manera, el hecho de que la actuación de la Fiscalía General de la Nación se haya realizado en virtud del ejercicio de una facultad constitucional y cumpliendo todas las ritualidades que señala la ley penal, no la exime de la responsabilidad que le acarrea por sus actuaciones, si éstas ocasionan daños antijurídicos a los ciudadanos.

El Consejo de Estado en su jurisprudencia ha señalado los siguientes supuestos que deben cumplirse para que se configure la responsabilidad del Estado en aplicación del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991. Consecuente con ello, el Consejo de Estado en recientes pronunciamientos también ha precisado que en cada caso en que las autoridades judiciales han privado de la libertad a una persona, incumbe analizar si la medida de aseguramiento fue más allá de lo que aquella razonablemente debía soportar a objeto de permitir que el Estado cumpla con el interés general de impartir recta y cumplida justicia.

Corolario de lo expuesto, si bien es cierto, la Fiscalía General de la Nación tiene facultades constitucionales y legales para asegurar la comparecencia de los

presuntos infractores de la Ley penal ante las instancias correspondientes mediante la medida de aseguramiento de detención preventiva, también lo es, que el ejercicio de esta facultad no se constituye en una causal de exoneración de responsabilidad en los eventos en que al ejecutar dicha medida se ocasione un daño antijurídico.

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD- Elementos que la configuran

PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD-Carga a la cual no está obligada a soportar/**DAÑO ANTIJURÍDICO**-Generado por la Fiscalía General de la Nación

Así pues, la detención que sufrió JAIRO GUTIERREZ HURTADO, deviene en injusta, pues quedó probado que es una persona adicta, enferma en consecuencia su conducta no fue antijurídica pues nunca se probó que el alijo incautado fuera para cosa distinta que su consumo, además su conducta no fue finalmente sancionada con una sentencia condenatoria, sino que efectivamente fue absuelto de los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación, el delito que se le endilgaba, se le impuso una carga que no estaba obligado a soportar, como fuera el tener que permanecer detenido por espacio de 11 meses y 04 días, con los consecuentes perjuicios que dicha circunstancia les acarreó tanto a él como a los demás demandantes.

Finalmente, al estar determinada lo injusta que fue la privación de la libertad de que fue objeto el sindicado y encontrarse que existe nexo causal entre la actividad desplegada por la Fiscalía General de la Nación y el perjuicio causado a los demandantes, cual fue la detención por espacio de 11 meses y 04 días del sindicado; ha de concluirse que el ente demandado en su accionar causó un daño y que éste resultó antijurídico, de donde surge la obligación de indemnizar a la luz de la cláusula general de responsabilidad plasmada en el artículo 90 de la Constitución Política.

Como podemos apreciar, hay una obligación inexorable, de un daño causado por esa privación de la libertad, no hay duda que tal daño se torna antijurídico y debe serle reparado por el Estado, teniendo en cuenta que se está violando los principios de la constitución política y la Convención de Derechos Humanos básicos y hay una responsabilidad patrimonial por los daños antijurídicos que le sean imputables, por tanto se concluye que se debe dar la aplicación del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, la responsabilidad patrimonial del Estado procede cuando se cumplen los supuestos antes mencionados.

Igualmente en reciente decisión Consejero Ponente: Ramiro Pazos Guerrero Bogotá, veintiocho (28) de agosto de dos mil quince (2015) Expediente: 33914 Radicación: 170012331000200001292 01 Actores: Álvaro Gómez Botero y otros Demandados: Nación-Fiscalía General de la Nación Naturaleza: Reparación directa se dijo lo siguiente:

"como ha sido el criterio reiterado de la Corporación, no es necesario demostrar que la autoridad judicial incurrió en algún tipo de error. Al

(11)

damnificado le basta con probar que se le impuso una medida privativa de su libertad o restrictiva de sus derechos en el curso de un proceso judicial, que dicho proceso culminó con una decisión favorable a su inocencia y que se le causó un perjuicio con ocasión de la detención o la medida impuesta. Con esa sola circunstancia, surge a cargo del Estado la obligación de indemnizar los daños sufridos³ . (subrayado fuera de texto)

La razón de ser de esta regla se sustenta en la constatación de que la persona, por el hecho de vivir en comunidad, no está obligada a soportar una carga tan lesiva de sus derechos fundamentales y, en general, de su proyecto de vida, como la privación de la libertad, sin recibir a cambio algún tipo de compensación. Al respecto se ha señalado: La Sala considera oportuno recoger expresiones en virtud de las cuales algunos sectores de la comunidad jurídica han llegado a sostener, sin matiz alguno, que el verse privado de la libertad ocasionalmente es una carga pública que los ciudadanos deben soportar con estoicismo. Definitivamente no puede ser así. Lo cierto es que cualquiera que sea la escala de valores que individualmente se defienda, la libertad personal ocupa un lugar de primer orden en una sociedad que se precie de ser justa y democrática. Por consiguiente, mal puede afirmarse que experimentar la pérdida de un ingrediente fundamental para la realización de todo proyecto de vida, pueda considerarse como una carga pública normal, inherente al hecho de vivir dentro de una comunidad jurídicamente organizada y a la circunstancia de ser un sujeto solidario. Si se quiere ser coherente con el postulado de acuerdo con el cual, en un Estado Social y Democrático de Derecho la persona junto con todo lo que a ella es inherente ocupa un lugar central, es la razón de la existencia de aquél y a su servicio se hallan todas las instituciones que se integran en el aparato estatal, carece de asidero jurídico sostener que los individuos deban soportar toda suerte de sacrificios, sin compensación alguna, por la única razón de que resultan necesarios para posibilitar el adecuado ejercicio de sus funciones por las autoridades públicas. La afirmación contraria sólo es posible en el seno de una organización estatal en la que la persona con todos sus atributos y calidades deviene instrumento, sacrificable, reductible y prescindible, siempre que ello se estime necesario en aras de lograr lo que conviene al Estado, es decir, en un modelo de convivencia en el que la prevalencia de un desde esta perspectiva, mal entendido interés general, puede justificar el desproporcionado sacrificio del interés particular incluida la esfera de derechos fundamentales del individuo sin ningún tipo de compensación. Y es que si bien es cierto que en el ordenamiento jurídico colombiano la prevalencia del interés general constituye uno de los principios fundantes del Estado a voces del artículo 1º in fine de la Constitución Política, no lo es menos que el artículo 2º de la propia Carta eleva a la categoría de fin esencial de la organización estatal la protección de todas las personas residentes en Colombia en sus derechos y libertades. Ello implica que la procura o la materialización del interés general, no puede llevarse a cabo avasallando inopinada e irrestrictamente las libertades individuales, pues

³ 30 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de agosto de 2013, exp. 29779, C.P. Danilo Rojas Betancourth

en la medida en que la salvaguarda de éstas forma parte, igualmente, del contenido teleológico esencial con el que la Norma Fundamental programa y limita la actividad de los distintos órganos del Estado, esa protección de los derechos y libertades también acaba por convertirse en parte del interés general⁴ ."

ESTIMACION DE LA CUANTÍA

De conformidad con lo establecido en la descripción de los hechos se funda la responsabilidad por parte de quienes están designados para la **ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA**; así las cosas por razón de los perjuicios sirvan para pagar a mi mandante las siguientes sumas:

PERJUICIOS MORALES:

Siendo cierto que el señor JAIRO GUTIERREZ HURTADO fue privado de manera injusta de su libertad, como quiera que le ente instructor no logró desvirtuar la presunción de inocencia y no logró probar mas allá de toda duda razonable la responsabilidad penal de mi patrocinado, quien efectivamente estuvo privado de su libertad por orden judicial de un Juez de Control de Garantías; así las cosas el señor JAIRO GUTIERREZ HURTADO, no estaban en la obligación jurídica de sufrir una privación injusta de la libertad eventos provocados por la Administración de Justicia, en especial la Fiscalía General dela Nación quien solicitó al Juez de Control de Garantías la imposición de una medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra de JAIRO GUTIERREZ HURTADO. De esta manera, JAIRO GUTIERREZ HURTADO, ha sufrido un detrimento moral por la arbitraria captura por lo tanto aquellos daños los cuantifico en OCHENTA SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.

Ello con fundamento en el DOCUMENTO FINAL APROBADO MEDIANTE ACTA DEL 28 DE AGOSTO DE 2014 REFERENTES PARA LA REPARACIÓN DE PERJUICIOS INMATERIALES Documento ordenado mediante Acta No. 23 del 25/sep/2013 con el fin de recopilar la línea jurisprudencial y establecer criterios unificados para la reparación de los perjuicios

⁴ Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de julio de 2012, exp. 24688, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

inmateriales.

	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4	NIVEL 5
Reglas para liquidar el perjuicio moral derivado de la privación injusta de la libertad	Victima directa, cónyuge o compañero (a) permanente y parientes en el 1° de consanguinidad	Parientes en el 2° de consanguinidad	Parientes en el 3° de consanguinidad	Parientes en el 4° de consanguinidad y afines hasta el 2°	Terceros
Término de privación injusta en meses		50% del Porcentaje de la Víctima directa	35% del Porcentaje de la Víctima directa	25% del Porcentaje de la Víctima directa	15% del Porcentaje de la Víctima directa
	SMLMV	SMLMV	SMLMV	SMLMV	SMLMV
Superior a 18 meses	100	50	35	25	15
Superior a 12 e inferior a 18	90	45	31,5	22,5	13,5
Superior a 9 e inferior a 12	80	40	28	20	12
Superior a 6 e inferior a 9	70	35	24,5	17,5	10,5
Superior a 3 e inferior a 6	50	25	17,5	12,5	7,5
Superior a 1 e inferior a 3	35	17,5	12,25	8,75	5,25
Igual e inferior a 1	15	7,5	5,25	3,75	2,25

Toda vez que el señor JAIRO GUTIERREZ HURTADO, permaneció privado de la libertad durante **11 MESES Y 04 DIAS**.

B. PERJUICIOS PÉRDIDA DE LA VIDA EN RELACION:

1. JAIRO GUTIERREZ HURTADO 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes

En lo que hace a la pretensión relativa a la indemnización de los perjuicios a la vida de relación, la Sección tercera de la Sala de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado tiene en cuenta el criterio jurisprudencial fijado por el Consejo de Estado relativo al cambio de dicho rubro del daño inmaterial por el de alteración grave de las condiciones de existencia⁵ . La indemnización de este tipo de daño –autónomo e independiente del daño moral– procede cuando las acciones u omisiones imputables a la Administración generan una protuberante perturbación de las condiciones de vida de los afectados. Sobre la materia, sostuvo el Consejo de Estado: “[...] la doctrina ha señalado, precisamente, que ‘para que se estructure en forma autónoma el perjuicio de alteración de las condiciones de existencia, se requerirá de una connotación calificada en la vida del sujeto, que en verdad modifique en modo superlativo sus condiciones habituales, en aspectos significativos de la normalidad que el individuo llevaba y que evidencien efectivamente un trastocamiento de los roles cotidianos, a efectos de que la alteración sea entitativa de un perjuicio autónomo, pues no cualquier modificación o incomodidad sin solución de continuidad podría llegar a configurar este perjuicio, se requiere que el mismos tenga significado, sentido y afectación en la vida de quien lo padece’. Por su parte, en la doctrina francesa se ha considerado que los llamados troubles dans les conditions d’existence pueden entenderse como ‘una modificación anormal del curso de la existencia del demandante, en sus ocupaciones, en sus hábitos o en sus proyectos’ o ‘las modificaciones aportadas al modo de vida de los demandantes por fuera del mismo daño material y del dolor moral’. El reconocimiento de indemnización por concepto del daño por alteración grave de las condiciones de existencia es un rubro del daño inmaterial -que resulta ser plenamente compatible con el reconocimiento del daño moral-, que, desde

⁵ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de agosto 15 de 2007, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Exp. 2003-00385.

luego, debe acreditarse en el curso del proceso por quien lo alega y que no se produce por cualquier variación menor, natural o normal de las condiciones de existencia, sino que, por el contrario, solamente se verifica cuando se presenta una alteración anormal y, por supuesto, negativa de tales condiciones. En otras palabras, para que sea jurídicamente relevante en materia de responsabilidad estatal, el impacto respecto de las condiciones de existencia previas ha de ser grave, drástico, evidentemente extraordinario." Si con lo anterior se ha querido reconocer la existencia de perjuicios extra patrimoniales, por fuera del tradicional perjuicio moral, con una noción mucha más amplia de lo que en su momento se denominó el perjuicio fisiológico o el daño a la vida de relación, con la nueva de alteración de las condiciones de la existencia, en el entendido que son los cambios bruscos y relevantes en las condiciones de vida de una persona. EN el presente asunto es vidente el trastocamiento de los roles cotidianos de JAIRO GUTIERREZ HURTADO, quien fue privado de su libertad y quien ha manifestado sentir temor de salir de su casa como quiera que prácticamente quedó señalado dentro de su comunidad como persona expendedora de estupefacientes, manifiesta que cuando sale se siente perseguido por constantes requisas que la policía le hace y la persecución que en un municipio tan pequeño como lo es Tuluá (V) lugar de su residencia ha sido estigmatizado por los habitantes, incluso denegándole posibilidades de trabajo en oficios varios por haber sido detenido, no es desacertado afirmar que la privación de la libertad genera un estigma para quien la sufre y que posteriormente sufre el rechazo de la sociedad porque aparentemente es un delincuente y una persona mal relacionada, una persona que ya no genera confianza para los demás ciudadanos.

PERJUICIOS MATERIALES :

Tomando en cuenta que JAIRO GUTIERREZ HURTADO, laboraba en oficios varios, además de ser pensionado de los Ferrocarriles nacionales, sin embargo devengaba ingresos por otros trabajos que realizaba pero no se pueden demostrar sus ingresos, el Consejo de Estad estableció que: "No obstante los medios probatorios arimados al proceso no permiten tener por demostrado el monto del ingreso percibido por tal concepto, razón por la cual se acudirá a la presunción de que dicha actividad le generaba como ganancia 1 S.M.M.L.M."⁶

El salario mínimo para el 2014 \$616.000,00, para el 2015 \$644.350

Año 2014 \$ 923.999

Año 2015 \$ 6.207.238.

TOTAL \$7.131.237.

Dineros que deben ser indexados y actualizados al momento del pago de la obligación por parte del Estado.

⁶ Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo sección III Subsección A Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez, Bogotá D.C., 4.III.2011 radicación No. 66001-23-31-000-1998-00409-01 (19067) Actor Noelia del Socorro Londoño Giraldo y otros.

115

COMPETENCIA

Es usted competente señor Juez Administrativo de Buga (V), de conformidad con el factor territorial de la ciudad donde usted despacha, como quiera que los hechos sucedieron en la localidad de Tuluá (V), el cual pertenece a su Circuito Administrativo judicial. Así mismo la cuantía la cual se toma el valor de los perjuicios materiales, es decir **\$7.131.237.**, por ello es usted competente para conocer del presente asunto.

PRETENSIONES

Que sea condenados dentro del trámite de ACCION DE REPARACION DIRECTA los demandados **NACION- FISCALIA GENERAL DE LA NACION, RAMA JUDICIAL- DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTARCION JUDICIAL**, por cumplirse lo preceptuado en la normatividad pertinente teniendo como fundamento la PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD que sufrió JAIRO GUTIERREZ HURTADO, dentro del proceso radicado Bajo el No. 76-834-31-04-002-2015-0009-00 en el cual estuvo privado injustamente de su libertad 11 meses y 04 días, asunto que terminó con preclusión en favor de mi patrocinado. En consecuencia de lo anterior se realicen las siguientes reconocimientos :

PRIMERA: Que se reconozcan y paguen perjuicios morales a JAIRO GUTIERREZ HURTADO **en la cuantía tasada es decir 80 S.M.M.L.V.**

SEGUNDA: Que se reconozcan y paguen los perjuicios de vida de relación en favor de JAIRO GUTIERREZ HURTADO en cuantía de 200 S.M.M.L.V.

TERCERA: Que se reconozca y pague en favor de JAIRO GUTIERREZ HURTADO perjuicios materiales que ascienden a la suma de **\$7.131.237.** Dinero que debe ser indexado y actualizado al momento del pago efectivo de la obligación.

PRUEBAS

1. **CUADERNO 1.** Proceso tráfico. Fabricación o porte de estupefacientes. Acusado JAIRO GUTIERREZ HURTADO. Rad. 76-834-31-04-002-2015-009-00 de 229 folios y 04 CD' siendo el CD 04 el que posee la audiencia de lectura de fallo que justifica la exoneración del acusado.
2. Copia acta Audiencia de Conciliación celebrada ante Procuraduría 57 Judicial I Delegada ante lo contencioso administrativo, celebrada el 11 de abril de 2016 en Santiago de Cali (V)

ANEXOS

1. Poder legalmente conferido, con el cual se acredita la personería del suscrito con expresas facultades para conciliar y demandar.
2. Los documentos relacionados en el acápite de pruebas.

JURAMENTO

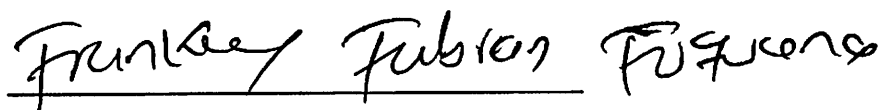
Manifiesto, bajo la gravedad del juramento, que mi representado ni el suscrito apoderado hemos presentado solicitudes anteriores de conciliación prejudicial con base en los mismos hechos, ni demanda contencioso-administrativa.

NOTIFICACIONES

EL SUSCRITO Y EL CONVOCANTE EN: la Calle 46 No. 25D – 41 Tuluá Valle del Cauca B/Nuevo Príncipe. Tel 2321106-- 3167422242: email: franfafu@hotmail.com

- **DIRECCION EJECUTIVA DE LA RAMA JUDICIAL** o quien haga de sus veces ante lo Contencioso Administrativo. Calle 12 No. 7 – 65 Bogotá D.C. PBX: 565 8500. info@cendoj.ramajudicial.gov.co
- **FISCALIA GENERAL DE LA NACION**, Avenida el dorado carrera 45 No. 26-33 CAN Bogotá. jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co

Atentamente,



FRANKLY FABIAN FUQUENE RIVERA

C.C. No. 14.797.749 de Tuluá (V)

T.P. 226169 del C. S. de la Judicatura